

MEMORANDO



20161100080093

SG

Bogotá, 01-07-2016

PARA: Dr. **JULIÁN PONTÓN SILVA**
Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación.

C.Co. Dra. **ANDREA ROJAS ÁVILA**

DE: Dra. **LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE**
Secretaria General

ASUNTO: Respuesta al radicado No. 20164000075263 del 22/06/2016 –
Solicitud de concepto jurídico.

Cordial saludo doctor PONTÓN SILVA,

Doy respuesta al radicado de la referencia, a través del cual se solicitó a esta dependencia la emisión de un concepto jurídico sobre el mecanismo de vinculación de un aliado internacional para la ejecución de un proyecto a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación y la identificación de la información que legalmente podría entregarse a dicho aliado para la ejecución del negocio jurídico que se llegase a celebrar y, en consecuencia, procedo a pronunciarme con base en los siguientes:

ANTECEDENTES:

1.- En la fecha y a través del radicado interno señalado en el asunto, la Gestora **ANDREA ROJAS ÁVILA**, por ese entonces encargada de las funciones de Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación, indicó y solicitó a esta dependencia, lo siguiente:

"...me dirijo a usted con ocasión de hacer referencia (sic) a la propuesta "Midiendo la Productividad y Efectividad I+D+I Empresarial" IPF™ Innovation Readiness", presentada por Stage Gate, firma internacional reconocida globalmente como una firma de consultoría con 30 años de experiencia en innovación.

Dicha propuesta tiene como fin realizar un estudio piloto que permita caracterizar la productividad y efectividad de las inversiones I+D+I de las empresas colombianas cuya

Q



COLCIENCIAS

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

(sic) unidad de I+D+I se les ha otorgado reconocimiento o el estatus de altamente innovadora (sic). Así mismo, el estudio incluirá a las empresas que han participado en los programas de sistemas y Pactos por la Innovación, con el fin de calcular individualmente su productividad I+D+I en un marco de referenciación versus empresas de alto, mediano y bajo desempeño.

Por otra parte, el mandato del CONPES 3834 y los objetivos estratégicos, definen la creación e implementación de incentivos conducentes a incrementar exponencialmente la inversión I+D+I del sector privado para mejorar la competitividad y productividad del país. Por lo tanto, se necesita entender la capacidad de las empresas para generar ingresos a partir de las inversiones hechas en I+D+I.

Este estudio pretende realizarse en un periodo no superior a 4 meses y **no contempla aportes económicos en dinero de ninguna de las dos partes, pero sí contempla aportes en especie, así:**

Stage Gate International	Colciencias
<ul style="list-style-type: none"> - Plataforma IR.net - Evaluación y Reporte Técnico. - Medición IPFTM-Innovation Readiness. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo técnico y administrativo. - Información de la evaluación y las empresas que hacen parte de las EAI, pacto y sistema de innovación. - Divulgación de los resultados de la evaluación.

Entregables de Stage Gate International.

- Benchmarking IRTM.
 - Índice de Productividad I+D+I.
 - Nivel de Alineación IPFTM (Innovation Performance FrameworkTM).
 - Reporte Automático PDF Innovation ReadinessTM.
 - Segmentación e Identificación de las Empresas Innovadoras Apalancadoras: Altamente Innovadoras (High Performance), Medianamente Innovadoras (Medium Performance) y Poco Innovadoras (Low Performance).
 - Ranking Sectorial de Productividad y Competitividad.
- Informe de brechas en cada mejor práctica de los impulsores de IPFTM

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito amablemente que se emita un concepto sobre el mecanismo legal que permita aunar esfuerzos entre las dos entidades (modalidad de contratación, convenio o acuerdo, etc) y la viabilidad para que Colciencias entregue a una empresa privada que actúa como organización evaluadora de Unidades de I+D+I la información de las empresas que han realizado algún tipo de trámite ante Colciencias, tales como las EAI's y las que hacen parte de sistemas de innovación, entre otras..."
(Subrayas no originales)

2.- La anterior solicitud, sin perjuicio de que ya es una dinámica de gestión suficientemente conocida por las áreas misionales y las de apoyo del departamento administrativo, que decisiones del tipo de las mencionadas en el memorando interno que nos ocupa, específicamente las relativas a la celebración de contratos y convenios de ciencia, tecnología e innovación,

deben ventilarse en un escenario institucional diferente, concretamente, en el Comité de Subdirección de la entidad, ante quien deben exponerse como mínimo los siguientes elementos, en pro de conseguir la aprobación por parte de esa instancia colegiada de decisión:

- a) La identificación y sustentación de la causal de ciencia, tecnología e innovación que pretenda desarrollarse, atendiendo a lo previsto en el artículo 2º del Decreto 591 de 1991 y los demás instrumentos auxiliares para la calificación de ACTIS.
- b) La necesidad de financiamiento a terceros, de inversión, de gestión o de funcionamiento, que COLCIENCIAS (por conducto del área que requiera la contratación) o cualquier actor del SNCTel pretenda suplir con el contrato o convenio de que se trate.
- c) El señalamiento del objeto del contrato o convenio, en los términos más precisos posibles, aunque sin cerrar las posibilidades de ejecución, el cual se discierne a partir del segundo de los elementos anotados.
- d) El presupuesto disponible y las fuentes de financiación (en el caso de los aportes en especie debe hacerse el ejercicio de cuantificación correspondiente, en cifras y valores.
- e) La necesidad de emplear el procedimiento de *convocatoria* o el de *invitación a presentar propuesta*, para la selección del posible ejecutor; y,
- f) El señalamiento del posible vínculo jurídico que sea necesario celebrar con los eventuales ejecutores o, por lo menos, la identificación de sus características principales.

TESIS Y MARCO JURÍDICO APLICABLE:

1.- La competencia y otras cuestiones preliminares:

De conformidad con lo previsto en los numerales 3º, 5º y 6º del artículo 13 del Decreto 849 de 2016 "*Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS*", en materia de conceptualización jurídica, corresponde a esta secretaría general el ejercicio de las siguientes competencias específicas: (i) asesorar a la Directora General y a las demás dependencias de la entidad, en los asuntos jurídicos de competencia de la misma, (ii) rendir concepto a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTel¹ – en la

¹ Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, hoy integrado en el Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, en virtud de lo señalado en el artículo 186 de la Ley 1753 de 2015 "*Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. 2014-2018. "Todos por un Nuevo País"*".





interpretación, aplicación e implementación de la normatividad existente en materia de CTel y, (iii) atender y resolver las consultas y peticiones de carácter jurídico elevadas al Departamento y por las diferentes dependencias de la entidad.

La anterior norma, sin embargo, debe leerse en plena concordancia con lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, luego de la sustitución de su Título II (ordenada en el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015), a propósito del alcance de los pronunciamientos que emiten las autoridades administrativas en ejercicio de su función consultiva, los cuales carecen – es la regla general – de carácter vinculante u obligatorio, tanto en lo que corresponde a la administración, como en lo que atañe al propio interesado y al resto de la ciudadanía, lo cual implica que esta especial forma de intervención del aparato estatal no fue concebida para atender situaciones particulares y concretas, esto es, en las que se definan relaciones jurídicas de naturaleza individual, las cuales deben desatarse a través de la expedición de los respectivos actos administrativos creadores, modificatorios o extintivos de derechos y/o de obligaciones.

Es claro, en consecuencia, que los conceptos jurídicos que emite la secretaría general del departamento administrativo en ejercicio de sus competencias, en cualquier caso involucran una visión jurídica general o de contexto en la aplicación del marco normativo que rige para determinado asunto de la órbita de COLCIENCIAS o del catálogo funcional al que se encuentra sometida su actividad, pero de ninguna manera implican un pronunciamiento directo o de fondo, generador de efectos jurídicos individuales, pues ello equivaldría a invadir las competencias que les fueron asignadas a las demás dependencias y funcionarios de la entidad, encargados de la ejecución de actividades misionales o de apoyo a la gestión en el sector de la CTel.

2.- Delimitación de las interrogantes y procedencia en la emisión del concepto jurídico.

Como se desprende de la solicitud de la referencia, son dos las inquietudes que la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la entidad formuló a esta secretaría general.

Pues bien, en relación con la primera de ellas, esto es, el señalamiento del mecanismo jurídico de vinculación con el mencionado ejecutor, debo manifestar que nos abstenemos de impartir concepto jurídico pues, aparte de lo mencionado en el numeral 2 de los antecedentes, no se discierne una duda concreta generada a partir de la lectura del régimen jurídico aplicable al sector y a esta entidad de derecho público.

Lo anterior, sumado a que si se revisa el detalle de la solicitud, encontramos

que desde la formulación de la pregunta, el área técnica ya se decantó por una modalidad de vinculación (el convenio especial de cooperación), pues lo que pretende es **aunar esfuerzos a través de aportes en especie**, para la consecución del objeto reseñado, cual es: "...realizar un estudio piloto que permita caracterizar la productividad y efectividad de las inversiones I+D+I de las empresas colombianas cuya (sic) unidad de I+D+I se les ha otorgado reconocimiento o el estatus de altamente innovadora (sic). Así mismo, el estudio incluirá a las empresas que han participado en los programas de sistemas y Pactos por la Innovación, con el fin de calcular individualmente su productividad I+D+I en un marco de referenciación versus empresas de alto, mediano y bajo desempeño...".

En esa medida y en aras de sustentar jurídicamente la necesidad de contratación, se recomienda al área técnica tener en cuenta las normas aplicables a este tipo de negocios jurídicos, concretamente, las previstas en los artículos 1º a 4º y, 6º a 8º del Decreto 393 de 1991 y en los artículos 17º y 18º del Decreto 591 de 1991, que no fueron afectados con la derogatoria que se ordenó en el artículo 81 de la Ley 80 de 1993.

Agotado el anterior punto de la solicitud, a continuación se impartirá el respectivo concepto jurídico respecto de la segunda de las inquietudes ventiladas, esto es, la relativa a la tipología de la información que eventualmente pueda entregarse al ejecutor sugerido, en ejecución del convenio que llegara a celebrarse.

3.- Marco jurídico para el tratamiento de datos personales – Ley 1581 de 2012 – frente a las exigencias de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley 1712 de 2014 –.

Lo primero que debemos indicar en este punto, es que en ninguno de los estatutos jurídicos mencionados en el encabezado, se estableció una tipología casuística y precisa de la información y documentación que reposa en las entidades públicas, que pudiera ser entregada a terceros (quienes no son los titulares o dueños de dicha información), lo que delimita el alcance del presente asesoramiento, a indicar las categorías documentales que la ley entiende asumen naturaleza reservada y respecto de las cuales la circulación libre se encuentra expresamente restringida.

Así, tenemos que en los términos de lo previsto en los artículos 15 y 74 de la Constitución Política:

"Artículo 15.- Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de



comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley. (Subrayas no originales).

"Artículo 74.- Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley.

El secreto profesional es inviolable." (Subrayas no originales).

Surge de lo anterior que, en materia de acceso a la información y a los documentos que reposan o se encuentran bajo control y/o custodia de las entidades estatales, son la Constitución Política y las Leyes de la República, las únicas fuentes de excepcionalidad autorizadas por el ordenamiento jurídico colombiano, los que nos obliga a remitirnos al régimen general sobre el tratamiento de la información pública y privada de contenido reservado y/o confidencial y, sobre el tratamiento de los datos personales y los datos sensibles, contenido en los artículos 24, 25 y 27 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; a los artículos 2, 4 a 7, 9, 10, 12, 13, 17 y 18 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"; y, a los artículos 2 a 7, 18, 19, 21, 22, 24, 25 y 28 de la Ley Estatutaria 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la ley (sic) de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", de conformidad con los cuales:

De la Ley 1437 de 2011 – CPACA:

"Artículo 24.- Informaciones y documentos reservados. Sólo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones pública o privadas, así como la historia clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.

7. Los amparados por el secreto profesional.

8. Los datos genéticos humanos.

Parágrafo.- Para efectos de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 (sic) sólo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información." (Subrayas no originales).

"Artículo 25.- Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no esté cubiertas por ella." (Subrayas no originales).

"Artículo 27.- Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo."

De la Ley Estatutaria 1581 de 2012:

"Artículo 2º. Ámbito de aplicación.

(...)

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación:

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico;

(...)

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

c) A las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia;

d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales;

2



e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008²;

f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993³... (Subrayas no originales).

"Artículo 4º. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se aplicarán de manera armónica e integral, los siguientes principios:

a) **Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos:** El Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen;

b) **Principio de finalidad:** El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;

c) **Principio de libertad:** El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;

d) **Principio de veracidad o calidad:** La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

e) **Principio de transparencia:** En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan;

f) **Principio de acceso y circulación restringida:** El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley.

Los datos personales, salvo la información pública⁴, no podrán estar disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;

g) **Principio de seguridad:** La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

h) **Principio⁵ de confidencialidad:** Todas las personas que intervengan en el

² "Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones".

³ "Por la cual se regula la realización de los Censos de Población y Vivienda en todo el territorio nacional".

⁴ Y es aquí donde empieza a conectarse la norma con el estatuto jurídico contenido en la Ley 1712 de 2014, pues en ella es donde se define qué puede entenderse por información pública.

Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos, están obligadas a garantizar la reserva de la información inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. (Subrayas y negrillas no originales).

"Artículo 5º.- Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquéllos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, la vida sexual y los datos biométricos." (Subrayas no originales).

"Artículo 6º.- Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización;

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización;

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una Fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular;

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial;

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares."⁵ (Subrayas no originales).

⁵ **"Artículo 3º.- Definiciones.** Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) **Autorización:** Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;

b) **Base de Datos:** Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento;

c) **Dato personal:** Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

d) **Encargado del Tratamiento:** Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento;

e) **Responsable del Tratamiento:** Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;

f) **Titular:** Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento;

[Firma]



"Artículo 7º.- Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquéllos datos que sean de naturaleza pública..." (Subrayas no originales).

"Artículo 9º.- Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, en el Tratamiento se requiere autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior." (Subrayas no originales).

"Artículo 10.- Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:

- a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por una orden judicial;
- b) Datos de naturaleza pública;
- c) Casos de urgencia médica o sanitaria;
- d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;
- e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley." (Subrayas no originales)

"Artículo 12.- Deber de informar al Titular. El Responsable del Tratamiento al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente:

- a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo;
- b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes;
- c) Los derechos que le asisten como Titular;
- d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento.

Parágrafo. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de ésta."

"Artículo 13.- Personas a quienes se les puede suministrar la información. La

información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse a las siguientes personas:

- a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales;
- b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
- c) A los terceros autorizados por el Titular o por la Ley. (Subrayas no originales).

“Artículo 17.- Deberes de los Responsables del Tratamiento. Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

- a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;
- b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular;
- c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada;
- d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
- e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;
- f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a ésta se mantenga actualizada;
- g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento;
- h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley;
- i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular;
- j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley;
- k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos;
- l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo;





m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;

n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares;

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.”.

“Artículo 18.- Deberes de los Encargados del Tratamiento. Los Encargados del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;

b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la presente ley;

d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo;

e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en la presente ley;

f) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los Titulares;

g) Registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se regula la presente ley;

h) Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato personal;

i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio;

j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella;

k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares;

l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo.- En el evento en que concurren las calidades de Responsables del Tratamiento y Encargado del Tratamiento en la misma persona, le será exigible el

cumplimiento de los deberes previstos para cada uno."

Y, finalmente, de la Ley Estatutaria 1712 de 2014:

"Artículo 2°.- Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada ni limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley." (Subrayas no originales).

"Artículo 3°.- Otros principio de la transparencia y acceso a la información pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios:

Principio de transparencia: Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley, se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.

Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.

Principio de no discriminación. De acuerdo al cual los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud.⁶

Principio de gratuidad. Según este principio, el acceso a la información pública es gratuito y no se podrán cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información.

Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos.

Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales.

Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los

⁶ Salvo lo que correspondería a la solicitud de datos personales y sensibles que, como se vio, requieren expresión concreta de la causa y la finalidad para la cual se solicita el Tratamiento de la Información.

[Handwritten signature]

procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.

Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.

Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo a la misma." (Subrayas no originales).

"Artículo 4°.- Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.

Parágrafo. Cuando el usuario considere que la solicitud de la información pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada." (Subrayas no originales).

"Artículo 5°.- Ámbito de aplicación. (Corregido por el artículo 1° del Decreto 1494 de 2015). Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital;
(...)

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función;
(...)

f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público..." (Subrayas no originales).

"Artículo 6°.- Definiciones.

a) **Información.** Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen;

b) **Información pública.** Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en su calidad de tal;

c) **Información pública clasificada.** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser restringido, negado o exceptuado⁷, siempre que se trate de circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley;

d) **Información pública reservada.** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley;

e) **Publicar y divulgar.** Significa poner a disposición en una forma de acceso general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión;

f) **Sujetos obligados.** Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada incluida en el artículo 5º de esta ley;

g) **Gestión documental.** Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación;

h) **Documento de archivo.** Es el registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones;

i) **Archivo.** Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquél orden para servir de testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura;

j) **Datos abiertos.** Son todos aquéllos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos;

k) **Documento en construcción.** No será considerada información pública aquella información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado, en su calidad de tal. (Subrayas no originales).

"Artículo 7º.- Disponibilidad de la información. En virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente

⁷ Es el caso típico de la reserva o confidencialidad de los datos personales y los datos sensibles de que trata la parcialmente transcrita Ley Estatutaria 1581 de 2012.



ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Parágrafo.- Se permite en todo caso la retransmisión de televisión por internet cuando el contenido sea información pública de entidades del Estado o noticias al respecto."

"Artículo 18.- Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. (Corregido por el artículo 2º del Decreto 1494 de 2015). Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

- a) (Corregido por el artículo 1º del Decreto No. 2199 de 2015). El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado;
- b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o a la seguridad;
- c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Parágrafo.- Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable." (Subrayas no originales).

"Artículo 19.- Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:

- a) La defensa y seguridad nacional;
- b) La seguridad pública;
- c) Las relaciones internacionales;
- d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;
- e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;
- f) La administración efectiva de la justicia;
- g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;
- h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;

i) La salud pública.

Parágrafo.- Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberatorio de los servidores públicos." (Subrayas y negrillas no originales).

"Artículo 21.- Divulgación parcial y otras reglas. (Corregido por el artículo 3 del Decreto 1494 de 2015). En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable. La información pública que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a la información opera respecto del contenido de un documento público pero no de su existencia.⁸

Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento.

Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones." (Subrayas y negrillas no originales)

"Artículo 22.- Excepciones temporales. La reserva de las informaciones amparadas por el artículo 19 no deberá extenderse por un período mayor a quince (15) años."

"Artículo 24.- Del Derecho de acceso a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado, en la forma y condiciones que establece esta ley y la Constitución." (Subrayas no originales)

"Artículo 25.- Solicitud de acceso a la información pública. Es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública.

Parágrafo.- En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta." (Subrayas no originales).

"Artículo 28.- Carga de la prueba. Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer en reserva o confidencial. En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que representa el acceso a la información." (Subrayas no originales).

Conforme con lo visto, el ordenamiento jurídico es absolutamente claro y unívoco en cuanto corresponde a la interpretación del deber general de

⁸ Precisión fundamental si se tiene en cuenta que no se puede dejar de informar sobre la existencia de la información o documentación cuya custodia, control o cuidado esté en cabeza de un sujeto obligado, lo que equivale a decir que las excepciones al deber de publicidad operan, exclusivamente, respecto del contenido material de tales documentos e informaciones solicitados.





publicidad y de acceso a la información pública que repose o se encuentre bajo custodia o control de las entidades estatales, por razón de sus funciones, y esta conclusión, que se extrae de la sola lectura del extenso marco legal que se acaba de transcribir y de conformidad con el cual se puede concluir que:

a) En materia de reserva y confidencialidad de la información puesta en conocimiento o bajo control y custodia de las autoridades estatales, por razón de sus funciones, la autonomía de la voluntad de su titular, en el sentido de solicitar expresamente el mantenimiento de la misma frente a solicitudes de terceros, NO configura una de las excepciones señaladas en la Constitución Política o en la Ley, o, lo que es lo mismo, que la solicitud de un particular en el sentido de mantener su información (salvo lo que correspondería a los datos personales o sensibles, en los que la excepción opera por el simple ministerio de la ley) en condiciones de reserva, no convierte *per se* esa información en reservada o confidencial; todo lo contrario, por el principio de *máxima publicidad para titular universal* y por el *principio de divulgación proactiva de la información*, se presume que dicha información, salvo lo expresamente exceptuado, es pública y divulgable;

b) Atendiendo al régimen jurídico general definido en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 1437 de 2011, en la Ley 1581 de 2012 y en la Ley 1712 de 2014, toda información pública o de interés público en conocimiento o bajo control y custodia de las entidades estatales se presume tal, esto es pública y debe ser entregada a quien legítimamente la solicite, salvo las siguientes excepciones constitucionales y legales:

- La información relativa a los datos personales o sensibles de los particulares y de los funcionarios públicos;

- La información que puede causar afectación sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

- La información cuya divulgación tenga el potencial de causar daño a los intereses públicos (defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, la prevención, investigación y sanción de delitos y faltas disciplinarias, hasta tanto se produzca la acusación o se formule pliego de cargos, el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la efectiva administración de la justicia, la estabilidad macroeconómica y financiera del país o la salud pública).

- La información cuya divulgación tenga el potencial de causar daño sobre los siguientes derechos de los particulares: derecho a la intimidad – sin perjuicio de la información correspondiente a servidores públicos que sea objeto de divulgación por razones de transparencia –; derecho a la vida, a la salud y a la

integridad o seguridad personales; los secretos comerciales, industriales y profesionales; y, la reserva bancaria, respecto de la cual, sin embargo, puede solicitarse su levantamiento por orden de las autoridades administrativas o judiciales, en el marco de los procesos que éstas adelanten.

- La información consignada en documentos públicos en construcción o que sirven para la deliberación y toma de decisiones;

c) Los derechos de propiedad intelectual o los derechos de autor sobre una obra, invención o creación, así estén relacionados con un proyecto en materia de ciencia, tecnología e innovación, no fueron considerados esencialmente por el constituyente primario ni por el legislador como causal de excepción al deber general de publicidad, precisamente por cuanto que esta materia tiene un régimen jurídico de protección especial y propio, que antes que cualquier cosa, lo que busca es garantizar la titularidad de la idea, obra o invención, según el caso. (Registro y protección de ese registro).

4.- Respuesta:

Atendiendo a las consideraciones plasmadas en precedencia, esta secretaría general se permite formular respuesta a la segunda interrogante formulada en la solicitud de concepto, de la siguiente manera:

a) La reserva o confidencialidad de la de información relativa a este tipo de proyectos, opera bajo el régimen jurídico general de transparencia y acceso a la información pública, según el cual sólo tendrán el carácter de reservados o confidenciales, los siguientes documentos e informaciones: 1.- La información relativa a los datos personales o sensibles de los particulares y de los funcionarios públicos; 2.- La información que puede causar afectación sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 3.- La información cuya divulgación tenga el potencial de causar daño a los intereses públicos (defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, la prevención, investigación y sanción de delitos y faltas disciplinarias, hasta tanto se produzca la acusación o se formule pliego de cargos, el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la efectiva administración de la justicia, la estabilidad macroeconómica y financiera del país o la salud pública); 4.- La información aquella cuya divulgación tenga el potencial de causar daño sobre los siguientes derechos de los particulares: derecho a la intimidad – sin perjuicio de la información correspondiente a servidores públicos que sea objeto de divulgación por razones de transparencia –; derecho a la vida, a la salud y a la integridad o seguridad personales; los secretos comerciales, industriales y profesionales; y, la reserva bancaria, respecto de la cual, sin embargo, puede solicitarse su levantamiento por orden de las autoridades administrativas o judiciales, en el marco de los procesos que éstas adelanten; y, 5.- La información consignada en

documentos públicos en construcción o que sirven para la deliberación y toma de decisiones.

Sin perjuicio de lo anterior, no se debe perder de vista que como la confidencialidad o reserva se predicen respecto de la información materialmente consignada en un documento y no del documento propiamente dicho, el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 autorizó las divulgaciones parciales, producto de lo cual corresponderá a la administración decidir de manera motivada y suficiente, en cada caso, qué es susceptible de publicarse o de entregar información y qué no, atendiendo a la naturaleza de los datos de que se trate.

b) No comporta efecto jurídico vinculante, frente a los mandatos constitucionales y legales en materia de reserva y confidencialidad de la información pública o de interés público, la intención expresa de su titular para que ésta se mantenga secreta o confidencial.

De esta manera, el consentimiento es causa de reserva, pero sólo para el tratamiento de lo que jurídicamente pudiera considerarse como dato personal o sensible, no así respecto de la demás información contenida en el proyecto de que se trate, la cual adquiere vocación de ser pública al momento de someterse a la consideración de la entidad estatal, salvo las excepciones legales precisas que ya se señalaron en el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, respecto del mecanismo de interacción con los formuladores y ejecutores de proyectos y con la ciudadanía en general para el acceso a este tipo de información calificada, se sugiere el diseño de una ficha guía, siguiendo la matriz de lo que constitucional y legalmente se encuentra exceptuado del deber de publicidad. Es decir, un documento de diligenciamiento por el interesado (formulador o ejecutor), posiblemente sometido a la gravedad del juramento, en el que se consignen casillas correspondientes a cada una de las excepciones de ley, junto con un compromiso de confidencialidad de la entidad pública depositaria de la misma, en el que se deje expresa su obligación de mantener las condiciones de reserva, pero sólo para los datos expresamente excluidos de la obligación de publicidad según el ordenamiento jurídico.

ALCANCE DEL CONCEPTO:

Como se señaló en las observaciones preliminares a la tesis expuesta, el presente concepto jurídico comporta los precisos alcances señalados en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, luego de la sustitución de su Título II por virtud de lo ordenado en el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015.

Dispone la citada norma, lo siguiente:

"...Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución..." (Subrayas no originales).

Sin otro particular,

Cordialmente,


LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE
Secretaria General

Sin anexos.

Elaborado por: SME/UA.